Loja, 17 de agosto de 2023

Doctor.

Enrique Herrería Bonnet.

JUEZ CONSTITUCIONAL.

Quito.

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad en la causa No. 79-21-IS, mediante el auto de fecha 9 de agosto de 2023, notificado a los suscritos jueces el mismo día a través de los correos electrónicos institucionales, ponemos en su conocimiento el siguiente informe:

En primer lugar, respetuosamente le comunicamos que conocimos su requerimiento el día 16 de los cursantes, debido a que del 1º al 15 de agosto de 2023 estuvimos en goce de vacaciones, correspondientes al primer periodo del año 2023, de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal virtud, tuvimos acceso al correo electrónico institucional a la fecha de nuestro reintegro, por lo que a la brevedad posible nos encontramos dando contestación a su disposición.

En lo principal, mediante sorteo de fecha 15 de enero de 2020, correspondió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario del cantón Loja de la provincia de Loja, integrado por los jueces doctores Juan Carlos Pacheco Solano, Fernando Guerrero Ríos y María Augusta Montaña Galarza, ponente, el conocimiento del proceso contencioso administrativo de ejecución de reparación económica derivada de la acción de protección No. 11904-2019-00056, propuesto por la señora Inés Moraima Rodríguez Castro contra el Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS) y Delegada Provincial de ACCESS Loja.

El 17 de febrero de 2020, se libró el auto de mandamiento de ejecución que corre de fs. 158 a 160, en el que se ordenó con base en el informe pericial practicado y en observancia del literal b.9 de las Reglas Jurisprudenciales con efecto erga omnes, expedidas por la Corte Constitucional mediante sentencia N° 011-16-SIS-CC, dentro del caso N° 0024-10-IS, que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS) en el término de 15 días pague a la actora el valor de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS \$ 5.555,34, por concepto de remuneraciones dejadas de percibir, décimo tercera, décimo cuarta remuneraciones, fondos de reserva y gastos incurridos en la defensa en la acción de protección antes referida; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS \$ 862,62; y CIENTO VEINTE DÓLARES AMERICANOS \$ 120,00 a la perito Mgs. Leonela Torres Gallegos, por honorarios profesionales.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACCESS, en el escrito de fecha 21 de agosto de 2020 informó que se ha cumplido con el mandamiento de ejecución, y que con los comprobantes de Pago Nos. CUR 385 se ha cancelado el décimo tercer sueldo a la señora Inés Moraima Rodríguez por el periodo enero-agosto y mes de diciembre de 2019, debido al reintegro ordenado mediante acción de protección. Que con el CUR 213

se ha cancelado a la perito señora Cristina Leonela Torres Gallegos, sus honorarios; y con CUR de Pago No. 187 se ha satisfecho la obligación mantenida con la actora por la suma de \$ 5.555,34. Se corrió traslado con el escrito presentado por la parte accionada para que tanto la demandante como la señora perito se pronuncien; únicamente la actora, en el escrito de fecha 9 de septiembre de 2020 expresa que aún no se ha cumplido con la totalidad de la reparación dispuesta y que se encuentra **pendiente el pago al IESS de los aportes** de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019, lo que demuestra con la documentación que acompaña.

El Tribunal insistió por varias ocasiones que la entidad demandada pague dichos aportes, sin obtener respuesta favorable. Es así que en el auto de fecha 13 de mayo de 2021 constante a fs. 244-245 vta., con los argumentos expuestos, el Tribunal a esa fecha actuante, decidió elevar a conocimiento de la Corte Constitucional el incumplimiento de la ACESS, al amparo de lo que disponía el literal b.14 de las Reglas antes aludidas, cuyo texto copiamos: “Únicamente en el caso en que el competente tribunal contencioso administrativo después de emplear todos los medios necesarios y pertinentes para la ejecución del auto resolutorio, no lograre que el sujeto obligado cumpla con lo dispuesto se deberá poner en conocimiento de la Corte Constitucional dicha circunstancia, evitando de esta manera la imposición directa de sanciones por incumplimiento”. Mediante el oficio No. 0326-TCAT-2021 de fecha 19 de mayo de 2021 que se encuentra a fs. 246, se comunicó al señor Presidente de la Corte Constitucional lo resuelto por este órgano jurisdiccional y se remitió copia de las piezas procesales pertinentes.

El 26 de mayo de 2021, la Directora Ejecutiva de la ACESS, informó que ha cancelado los aportes que se encontraban pendientes, adjuntó copia de las planillas de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, con las que demostró el cumplimiento íntegro de la obligación. En esa virtud, se dictó el auto de 4 de junio de 2021, disponiendo que como se ha satisfecho la totalidad de los pagos ordenados en el mandamiento de ejecución, que se derivaron de la acción de protección No. 11904-2019-00056, se comunique al Tribunal Penal de Loja, que tramitó dicha acción de protección, de acuerdo a lo que mandan las Reglas Jurisprudenciales con efecto erga omnes, concretamente el literal b.13 que ordenaba: “Cuando el tribunal contencioso administrativo hubiere comprobado la ejecución integral de la reparación económica, no archivará el proceso; sino que previamente pondrá tal particular en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que emitió dicha medida dentro de la causa de garantías jurisdiccionales, esto es, del juez de instancia o de la Corte Constitucional para que sea esta autoridad quien proceda al archivo respectivo”. Se dispuso también que se curse un oficio a la Corte Constitucional haciéndole conocer que la institución demandada ha pagado la totalidad de los valores materia de la reparación económica a nuestro cargo. En efecto, a fs. 259, consta la copia del oficio No. 391-TCAT-2021 de fecha 07 de junio de 2021, dirigido al señor Presidente de la Corte Constitucional.

Una vez cumplido lo ordenado en el auto de 4 de junio de 2021, el 8 de junio del mismo año, se emitió el auto de archivo correspondiente.

Por todo lo expuesto, reiteramos que el proceso de ejecución de reparación económica se encuentra concluido por haberse satisfecho todos los pagos ordenados en el auto de mandamiento de ejecución. Particular que fue oportunamente comunicado a la Corte Constitucional como se relató en líneas anteriores.

En caso de requerir mayor información sobre el proceso, nos encontraremos prestos a proporcionarla.

Remitimos en formato digital el proceso No. 11804-2020-00026.

Para efectos de recibir notificaciones, señalamos los siguientes correos electrónicos:
maria.montano@funcionjudicial.gob.ec juan.pachecos@funcionjudicial.gob.ec
fernando.guerrero@funcionjudicial.gob.ec

Del señor Juez Constitucional.

Atentamente.